

Veinticuatro horas antes de la declaración del Colegio de Abogados, el martes 7 de agosto en la noche, los militares golpistas del alto mando de la Marina, habían decidido poner en marcha la idea de su vicealmirante José Toribio Medina, de presentar el golpe militar que se preparaba como una «respuesta» a un pretendido «golpe rojo». Los Servicios de Inteligencia de la Marina habían detectado una reunión pedida por alrededor de 200 suboficiales y marinería, en Talcahuano, para denunciar que desde el mes de junio, los mandos de los buques de la armada dirigían arengas a la tripulación, en alta mar, diciéndoles que «es necesario sacar de la Moneda al marxista Salvador Allende», «los marinos tenemos el deber patriótico de derrocar el actual Gobierno». Altamirano, junto con Miguel Henríquez, secretario general del MIR, y Óscar Garretón, del MAPU, explicaron a los suboficiales y marineros la situación política chilena y el peligro que representaban los oficiales fascistas, cuyas actuaciones estaban al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional. Plantearon la necesidad de hacer conciencia entre la marinería que «no se debe obedecer a los oficiales fascistas» si éstos ordenan un alzamiento contra el Gobierno.

El vicealmirante Merino y sus asesores del Servicio de Inteligencia estimaron que con ello tenían material suficiente para montar un «golpe rojo» en la Armada, y el 7 de agosto anunciaron oficialmente que se había descubierto una «subversión» en los buques de guerra «Almirante Latorre» y «Blanco Encalada», dirigida por Altamirano, Henríquez y Garretón. Se anunció el arresto de medio centenar de marineros y suboficiales, encabezados por un cabo de apellido Cárdenas.

En los días siguientes, los reporteros de los diarios de izquierda lograron saber cómo, en las bases navales de Talcahuano y Valparaíso, estos marineros estaban siendo obligados a firmar confesiones absurdas mediante procedimientos brutales, que horrorizaron a la opinión pública. Se descubrió en el Hospital Naval de Valparaíso a un marinero al cual le habían sido reventados, a golpes, los testículos. Esposas de los detenidos relatan las torturas y se logra establecer tres tipos de ellas:

a) Un tambor de petróleo abierto, lleno de orines y excrementos humanos, es utilizado para sumergir la cabeza del «interrogado» hasta el punto de la asfixia, cada vez que se niega

a responder o a reconocer alguna culpabilidad que los interrogadores quieren.

b) Colgados los prisioneros boca abajo, con las piernas abiertas, de una barra para hacer gimnasia, desnudos, reciben golpes con una fusta en el escroto, en el nacimiento de los testículos.

c) Los prisioneros son obligados a arrastrarse, desnudos, por una «piscina» llena de piedras quebradas a martillo, sobre la cual, a treinta o cuarenta centímetros del suelo, hay una fuerte malla de acero que impide levantarse. Los prisioneros deben reptar entre la malla y las piedras filudas, varias veces, durante los interrogatorios.

Los familiares de los marineros presos dan nombres de capitanes del Servicio de Inteligencia Naval a cargo de las torturas, y se publican.¹³

Esto sirve para agudizar los deseos de enormes sectores del pueblo de organizarse para «impedir la insurrección militar». Periódicos como el «Puro Chile» y «Noticias de Última Hora» se destacan por sus investigaciones sobre este suceso, además de dar a conocer hechos vergonzosos ocurridos durante el motín militar del 29 de junio, en que los soldados que ocuparon los edificios adyacentes al Palacio de La Moneda, saquearon los bolsillos y los escritorios de los empleados de esas oficinas públicas. Incluso se descubren verdades hilarantes como la del edificio de Tesorería, al lado oeste de Palacio, donde los soldados saquearon dinero, relojes, anillos de oro de los empleados y... ¡dos quesos y cuatro sandwiches que tenían para almorzar!

La presión sobre los políticos civiles comienza a ser más fuerte. El grupo de Gustavo Leigh, César Mendoza y José Toribio Merino, el día 20 de agosto, después del fracasado *putsch* del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz, ya había acordado el asesinato de Salvador Allende, y el 21 reciben la buena noticia:... Eduardo Frei ha manejado la situación muy bien y en no más de 48 horas se tendrá un acuerdo de la Cámara de Diputados declarando la «inconstitucionalidad» del Gobierno de Allende y conteniendo un «texto» tal como lo pidieron los generales Bonilla y Arellano Stark.

En realidad, el acuerdo sería aprobado el 22 de agosto, pero los generales en contacto con el Pentágono ya lo tenían el día 21 en su poder. En su parte fundamental decía que la Cámara acordaba «representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento

del orden constitucional y legal de la República», y les decía a los comandantes en jefe que eran ministros: «representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde PONER INMEDIATO TÉRMINO A TODAS LAS SITUACIONES DE HECHO REFERIDAS que infringen la Constitución y las leyes»...

Ese mismo día 21 de agosto, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional organizan una manifestación de «mujeres», frente a la casa del general Carlos Prats, ministro de Defensa todavía, para pedirle que se vaya y que deje a los demás generales «crear el poder militar». La manifestación había sido pedida por los generales en contacto con el Pentágono para «ablandar el ánimo» del general Prats, ya que habían acordado enviar al general Oscar Bonilla a la casa del comandante en jefe titular del Ejército, para pedirle «en nombre del cuerpo de generales, que renuncie... porque usted es una vergüenza para nuestra institución, por su apoyo demasiado leal al Gobierno de Allende». Bonilla tenía el encargo, además, de decirle a Prats que no podía resistirse porque «tenemos todas las medidas tomadas para limpiar de una vez la honra de nuestras Fuerzas Armadas».

Pero, dejemos que relate ese gravísimo momento el economista español Joan Garcés, asesor personal de Allende y testigo directo de estos hechos, según lo hizo en un documento a la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de octubre de 1973:

«El día martes, la derecha organiza una manifestación de mujeres ante la casa del ministro de Defensa. Las mujeres le insultan soezmente y le exigen que abandone las filas del Ejército. El servicio de Inteligencia fotografía a las esposas de seis generales y de otros altos oficiales. Esa tarde, el general Prats, enfermo y en cama, es visitado por el general Bonilla —hombre de Frei, cuya mujer se encontraba entre los manifestantes— quien le aconseja que renuncie como comandante jefe titular del Ejército. Pocos minutos después de la partida del general Bonilla llega el presidente Allende a casa del general Prats. Este le manifiesta su impresión de que en el Ejército se está tramando una traición, y conversa con el Presidente sobre las medidas adecuadas para hacerlo fracasar.

»De regreso a su residencia particular, el Presidente recibe la visita del ministro del Interior y del general subrogante de Carabineros, general Urrutia. Tiene invitados a comer a varios generales del Ejército y, al frente de ellos, Augusto Pinochet. Objeto de las conversaciones: medidas contra el golpe de Estado en gestación. Pasada la medianoche, el Presidente convoca a los dirigentes de los partidos de la coalición de Gobierno y de la Central Unica de Trabajadores, para manifestarles que, ante la gravedad de la situación militar, de acuerdo con los altos mandos del Ejército, ha resuelto llamar a retiro a los generales complicados en el intento de golpe. En previsión de que el ejercicio de sus facultades constitucionales de llamar a retiro a los generales que han perdido su confianza provoque una revuelta militar, manifiesta que el alto mando del Ejército ha estudiado la articulación de un plan de defensa del Gobierno con la colaboración de las fuerzas regulares y sindicatos obreros. Cerca de las dos de la madrugada, el Presidente es informado de que acaba de llegar el alto oficial que tiene que ultimar con el Gobierno y la Central Unica de Trabajadores el plan de defensa antigolpe para el día siguiente. Yo mismo vi a ese general. Se llama Augusto Pinochet».

Este relato de Joan Garcés nos revela cómo la ingenuidad política de altos dirigentes de la Unidad Popular, incluyendo al presidente Allende, permitió que «el líder de la insurrección militar», por acuerdo de los altos mandos en contacto con el Pentágono, conociera todo el despliegue de las fuerzas obreras en Santiago, como «responsable» de un plan de defensa antigolpe... Del golpe que él mismo estaba articulando en conjunto con la Marina, Aviación y Carabineros.

Al día siguiente, 22 de agosto, el general Prats reunió a los generales integrantes de la junta institucional, y les pidió que redactaran una declaración de «desagravio» a su persona y cargo, por la manifestación de las mujeres del día anterior. De los 22 generales presentes, dieciocho se negaron a hacerlo seguramente para evitar sospechas de Prats; los generales Pinochet, Brady, Sepúlveda y Pickering votaron a favor de la petición de Prats.

De inmediato, el general Prats concurre a La Moneda y presenta la renuncia a Salvador Allende. Leamos lo que dice Joan Garcés en el documento que citamos anteriormente:

«Ante esta situación, el general Pinochet manifiesta al presidente Allende que es conveniente aceptar la renuncia del gene-

ral Prats, como una medida para apaciguar las exigencias en su contra de la Aviación y la Marina. A cambio del retiro del general Prats, Augusto Pinochet se compromete a asumir la Comandancia en Jefe titular del Ejército, y llamar a retiro esa misma semana a seis generales implicados en la preparación del golpe de Estado. Encabezando la lista el general Bonilla, hoy su ministro del Interior».

El 23 de agosto, el general Prats deja de ser comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa. Acogido a retiro, escribe una carta pública de renuncia al Jefe del Estado, en un gesto de nobleza, previniéndolo que «renuncio porque ya no puedo detener» las fuerzas golpistas. Es decir, avisa a todo Chile que el golpe militar está en marcha. Pero su carta tiene poco eco.¹⁴

El 23, en la tarde, en una reunión de generales conspiradores, los generales Sepúlveda y Pickering, reciben las instrucciones para movilizar las tropas de Santiago en el «día D» (todavía no fijado y puesto tentativamente a partir de septiembre). En ese momento, Pickering y Sepúlveda se enteran que el golpe se dará sobre la base de «dar de baja» a unos seis mil dirigentes medios sindicales, políticos y de masas en las primeras horas del golpe, destruir concentraciones obreras y poblaciones humildes con fuego de tanques y aviación, y que se calcula que «con unos cincuenta mil muertos en los primeros tres o cinco días de combate habremos limpiado el terreno». Más que eso, cuando protestan indignados por esta táctica de asesinato y destrucción, de algún modo se enteran del plan para asesinar al presidente Allende y reciben instrucciones de no hablar con nadie porque «ni siquiera Pinochet» lo sabe. Pickering y Sepúlveda presentan sus expedientes de retiro del Ejército de inmediato, y el día 24 dejan de pertenecer a las filas. Al mando de la guarnición de Santiago y de la Segunda División es nombrado el general de brigada Herman Brady Roche y, de hecho, el general Sergio Arellano Stark reemplaza a Pickering.

Mientras tanto, Pinochet se las arregla con Allende para no despertar sospechas y no pedir el retiro de los generales metidos en la conspiración. Joan Garcés lo cuenta así:

«En los últimos días de agosto el propio general Pinochet pide al Presidente de la República postergar el retiro de los generales golpistas para la Junta Calificadora del Ejército, a celebrar en la segunda mitad de septiembre. Justificación: ésta sería una resolución «institucional» interna, que él impondría como comandante en jefe. Con ello se preservaría al Presiden-

te de la crítica de querer retirar a generales por motivos políticos. Personalmente, en el transcurso de la última semana de agosto y primera de septiembre, tuve ocasión de escuchar en varias oportunidades al presidente Allende reiterar cómo pensaba frente al movimiento militar subversivo que se sentía a punto de estallar. Yo participé en su última reunión de trabajo antes de su masacre, el 10 de septiembre. Estaban presentes en ella otros tres colaboradores del Presidente. En esa oportunidad, el Presidente reiteró que en las Juntas de Calificación Ordinaria que debían tener lugar en las semanas siguientes, de acuerdo con los comandantes en jefe, iba a ejercer definitivamente sus facultades legales para llamar a retiro a los líderes del golpe de Estado. Esto había sido personalmente conversado por el presidente Allende con el comandante en jefe de la Marina, almirante Montero, y con el comandante en jefe del Ejército, general Pinochet».

Y la Marina

El día 31 de agosto, el esquema insurreccional se dibujó todavía con mayor nitidez, cuando el grupo de altos mandos navales dirigidos por José Toribio Merino, obligó al almirante Raúl Montero Cornejo a presentar su dimisión como comandante en jefe de la Armada al presidente Allende.

El hecho ocurrió después que Montero tomara parte en el Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, en la mañana del 31 de agosto, para calificar a todos los oficiales ejecutivos de la institución. Al mediodía, en Valparaíso, los altos mandos se reunieron a almorzar. Cuando llegó Montero a sumarse, los almirantes le dijeron que era mejor que se retirara porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le tenían confianza. Montero anunció que presentaría su renuncia al presidente Allende, y así lo hizo en la tarde. Dice Joan Garcés:

«Esa tarde, a su regreso a Santiago, comunicó los hechos al presidente Allende y le presentó su renuncia. El doctor Allende se la rechazó y le solicitó que continuara en su cargo, por el bien del país, algunas semanas más mientras lograba desarticular el golpe en la Marina.

»El 11 de septiembre, el almirante Montero fue arrestado por los golpistas y reemplazado en la Comandancia en Jefe por el insurrecto almirante Merino, actual miembro de la Junta Militar.